

Derrotar al Pacto: Llamada urgente al centro político

Defeat the Pact: Urgent call to the political center

Gino Costa Santolalla¹

© El autor. Artículo de acceso abierto,
distribuido bajo los términos de la Licencia
Creative Commons Atribución 4.0 Internacional.



DOI: <https://doi.org/10.20453/ah.v68i1.6661>

La democracia ha sido tomada por el Pacto, pero no está perdida, aunque casi. El Pacto es una amplia coalición parlamentaria que ha venido capturando varios poderes del Estado —primero el Tribunal Constitucional, luego el Ejecutivo con Dina Boluarte, seguido de la Defensoría del Pueblo, la Sunedu, la Junta Nacional de Justicia y la Contraloría General— y trabaja con esmero en controlar el Ministerio Público, el Poder Judicial y los organismos electorales. Además, tiene en la mira a los medios de comunicación, la sociedad civil organizada y el sistema interamericano de derechos humanos. Si logra su propósito, tendrá todas las instituciones en sus manos, tal como lo hizo Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos a fines de los años noventa. Ese es su objetivo: revivir el proyecto autocrático, por ahora desde el Congreso.

La alianza parlamentaria que lo sustenta es amplia, flexible e informal. Está encabezada por el fujimorismo, el acufismo y el cerronismo, que controlan las comisiones clave de Constitución, Justicia y Acusaciones Constitucionales, respectivamente. Otras bancadas que la integran son las de Rafael López Aliaga, la de Luna, los Niños de Acción Popular y los profesores de Pedro Castillo, así como las de Somos Perú, que llegó con el

importante voto de Martín Vizcarra, y la de Avanza País, que tiene a Phillip Butters como candidato presidencial.

Sin distinguos ideológicos, políticos o doctrinarios, los une el deseo de medrar del poder, es decir, expoliar los recursos públicos y vender influencias al mejor postor, y la determinación de sobrevivir judicial y electoralmente. Para ello, requieren un sistema que neutralice cualquier contrapeso a su poder, someta la justicia y silencie la prensa independiente. Buscan un régimen de impunidad, sin separación ni equilibrio de poderes, sin independencia judicial y sin respeto a los derechos ciudadanos. Es todo lo contrario de un orden democrático, sin controles que frenen, persigan y sancionen la gran corrupción en el poder, funcional a una casta parasitaria que desconoce el bien común y es incapaz de despertar la ilusión y la esperanza de la grandeza nacional. Peor aún, que busca retrotraernos a un pasado oprobioso, despótico y oscurantista, contrario al norte de libertad, progreso y justicia de las democracias de mercado más prósperas del mundo al que debemos aspirar.

Este proyecto pasadista y reaccionario no se sostendría sin una maquinaria comunicacional bien afiatada, aunque informal que lo apunala, defiende y justifica a través de eficientes campañas de desinformación y de la constante descalificación de quienes percibe como sus adversarios políticos. Las mentiras y las teorías conspirativas son su instrumento, la verdad su víctima, y la desconfianza

¹ Ph. D. en Relaciones Internacionales por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Excongresista y exministro del Interior

generalizada, junto con el envenenamiento de la convivencia, su resultado. El núcleo de este ecosistema lo integran Willax Televisión, *Expreso*, *La Razón* y PBO Radio.

En su labor de degradación institucional, política y moral, el Pacto ha avanzado mucho, pero no ha vencido. Por eso, aunque tomada, depreciada y exhausta, la democracia aún puede ser salvada. Sobreviven todavía, cada vez más amenazados y arrinconados, una Junta de Fiscales Supremos y una Corte Suprema de Justicia independientes, núcleos autónomos de fiscales y jueces profesionales, organismos electorales imparciales, medios de comunicación capaces de investigar y develar los abusos de poder, y organizaciones no gubernamentales golpeadas, pero combativas.

La capacidad de resistencia institucional, empero, puede ralentizar la deriva antidemocrática, pero no detenerla ni revertirla. Para ello, se requiere de una amplia oposición política de signo opuesto, desafortunadamente inexistente hasta ahora, pero que podría cuajar si los núcleos democráticos con inscripción electoral se unen. Por ahora, la oposición, espontánea y desorganizada, solo tiene rostro social y cívico, más no político. La primera, aún en formación y con agenda limitada, se expresa desde septiembre del año pasado en las movilizaciones de transportistas y otros sectores golpeados por la violencia, que cuestionan a la coalición gobernante donde es más débil, en su pasividad y complacencia con la delincuencia asesina. La otra, que es la cívica, se ejerce valientemente en todo el país desde la trinchera periodística en medios tradicionales, virtuales y redes sociales, oposición que desafortunadamente ya tiene víctimas mortales en su haber.

La única oportunidad de cambio en los próximos años son las elecciones generales de abril de 2026. Sería una tragedia que desperdiciáramos la oportunidad de acabar con el Pacto, derrotarlo electoralmente y dar paso a la reconstrucción democrática. Hacerlo no solo es un imperativo categórico, sino, perfectamente, posible, dada su profunda impopularidad, su absoluta falta de legitimidad, y su rechazo unánime en todos los estratos, sectores y territorios. La completa carencia de respaldo ciudadano es una vulnerabilidad insalvable del Pacto, que lo debería condenar irremediabilmente. No hay gobierno en América Latina, y muy probablemente en el

mundo, con más alta descalificación que el de Boluarte; ni qué decir del Congreso que la sostiene. Por eso, parece que la mesa está servida para sus opositores, a condición de que los tenga.

Boluarte tiene una vulnerabilidad de origen, no porque no le correspondiera la presidencia, sino por la manera en cómo se hizo cargo. Gracias a Pedro Castillo, cuyo desastroso gobierno y fallido golpe de Estado aceleró la regresión democrática, asumió la presidencia, traicionando a quienes la llevaron al poder y con quienes lo compartió como ministra durante los primeros 16 meses del quinquenio. Juramentó hasta el 2026, en abierto desacato de la expectativa mayoritaria que reclamaba adelanto de elecciones, y se consolidó reprimiendo las protestas a sangre y fuego. Gobernó de espaldas al país desde el día uno, con el exclusivo apoyo de sus antiguos enemigos políticos, y el aval de una buena parte de las élites empresariales y mediáticas que se habían negado a reconocer los resultados electorales del 2021.

El gobierno de Boluarte no ha podido asegurar tasas de crecimiento económico como las que el contexto internacional favorable permite; tampoco ha podido recuperar los niveles de pobreza, ingresos e ingesta alimentaria anteriores a la pandemia. Tampoco ha podido detener el populismo fiscal del Congreso alentado por el Tribunal Constitucional. No destaca por su seriedad, sino por el abuso de su poder, su frivolidad y sus mentiras. Cuenta con múltiples investigaciones por enriquecimiento ilícito y corrupción, de las que se ha defendido con más éxito que su predecesor, obstruyendo la justicia, atacando a la prensa y fiscalía, y desarticulando los equipos policiales y fiscales que la indagaban. De nada le valdrá, terminará sumándose a esa lista ignominiosa de expresidentes en manos de la justicia; es lo que corresponde.

Su balance y la del Congreso van de la mano, no pueden distinguirse porque ha sido y es, en la práctica, la presidenta de un gobierno parlamentario, nombrada y removida por el Congreso en cualquier momento. El Pacto cree que, si lo hace ahora, sus posibilidades electorales mejorarán. Es probable, aunque difícil, que el país olvide tan rápido una simbiosis evidente y descarada. Tampoco es tarea fácil encontrar una figura presidencial tan predecible y confiable para momentos

complicados como los que se vienen. Quizá al final, mejor malo conocido que bueno por conocer. Lo sabremos pronto.

Su desastrosa política de seguridad es la otra gran vulnerabilidad de la coalición gobernante, no solo porque ha fallado sin atenuantes ante la principal preocupación ciudadana, sino porque su conducta ha fomentado la violencia. El Legislativo ha desmantelado el marco normativo para prevenir y combatir el crimen organizado, y salvo con un par de excepciones, el Ejecutivo ha concordado en un paquete procrimen y proimpunidad, desvergonzado e inverosímil. Es más, a ese esfuerzo se le suma la destrucción de la inteligencia policial, el debilitamiento de la investigación criminal y la drástica reducción del presupuesto para combatir la minería ilegal, entre otros.

Vaya paradoja viniendo de una coalición parlamentaria de vocación autoritaria, cuya mayoría de integrantes expresan abiertamente sus simpatías por Nayib Bukele. Es decir, los promotores de la «mano dura» nos desarmen ante el fenómeno criminal, imponiendo de facto la «mano blanda» contra extorsionadores, narcos y corruptos. Todo indicaría que lo que les gusta del presidente salvadoreño no es su política de seguridad, a Dios gracias, sino que sea «el dictador más *cool* del mundo».

Poner fin a este estado de cosas debería comenzar por derrotar en las urnas a los principales exponentes políticos del Pacto, para que un nuevo gobierno y Congreso acometan la urgente tarea de la reconstrucción democrática. ¿Es esto realista? Aunque todavía es temprano para hacer pronósticos electorales, gracias a las reflexiones de Alfredo Torres y Fernando

Tuesta hay escenarios más probables que otros.



Quizá la principal desventaja es su fragmentación. **En una elección en la que muy pocos pasarán la valla parlamentaria**, es un riesgo muy alto que los distintos núcleos de centro compitan divididos...



Primero, la inédita fragmentación de la oferta electoral producto de la inscripción de 43 partidos políticos no se traducirá en una representación *p a r l a m e n t a r i a* igualmente atomizada. Por el contrario, debido a modificaciones en la valla electoral y tomando

Esto ha ocurrido en pleno *boom* del oro ilegal, de la cocaína, de las extorsiones, de los homicidios y de la corrupción en el poder, mientras se consolida en el territorio nacional la presencia de organizaciones criminales transnacionales de origen venezolano, colombiano, ecuatoriano y brasileño. La única manera de explicar la abdicación de una de sus funciones principales, la de proteger a la ciudadanía de las amenazas contra su seguridad, es la complicidad de quienes gobiernan con el crimen. Porque no solo es incapacidad o desidia, es una estrategia deliberada, premeditada para debilitar, socavar y destruir las capacidades públicas. Una suerte de captura de la política legislativa por las prósperas economías ilícitas y las organizaciones criminales que las explotan.

en cuenta los resultados electorales de los últimos veinte años, el próximo Congreso podría tener menos partidos que en el pasado y no más. Según Torres, hay una alta probabilidad que el Senado solo tenga representantes de dos o tres partidos y la Cámara de Diputados uno o dos más. Tuesta, por su parte, descarta más de seis partidos en el Congreso.

Segundo, en las últimas tres elecciones generales (2011, 2016 y 2021) el voto parlamentario en las regiones se disputó entre el fujimorismo y la izquierda, representada por Ollanta Humala, Verónica Mendoza y Pedro Castillo, respectivamente. No hay razones para pensar que el voto al Congreso bicameral no se vuelva a concentrar

en una fuerza mayoritaria de derecha, seguramente el fujimorismo o quizá alguno de sus contendores en ese sector, y una fuerza mayoritaria de izquierda, aún por determinarse.

Tercero, la misma lógica se puede extrapolar a las presidenciales. Dos de las tres últimas elecciones se definieron entre el fujimorismo y la izquierda, salvo el 2016, cuando la final fue con Pedro Pablo Kuczynski, de centro derecha, cuyo ingreso a la segunda vuelta se vio favorecido por la división en la izquierda con el voto por Gregorio Santos. Si el centro político tuviera una representación competitiva, ese riesgo existiría, tanto para la izquierda como para la derecha.

Cuarto, una elección en la que pocos pasarán la valla beneficiará a los más conocidos, quienes tienen mayor reconocimiento, organización y recursos para hacer campaña. Desde este ángulo, los partidos del Pacto llevan una gran ventaja, especialmente porque hasta ahora no tienen competencia significativa.

En la derecha, la novedad es Phillip Butters, quien entra a competir con Fujimori y López Aliaga. Tanto Hernando de Soto como Carlos Añaños quedaron descartados; Carlos Álvarez, otro aspirante con fuerza, podría seguir la misma suerte debido a sus últimas declaraciones. En la izquierda, Pedro Castillo y Antauro Humala son sus líderes más populares, pero ninguno puede participar en las presidenciales. Su intención de voto congresal parecería ser ahora más alta que la de los candidatos presidenciales de derecha, que encabezan los primeros sondeos. Todo indica que lo más probable será una reedición de la confrontación del 2021 entre derechas e izquierdas liberales y antidemocráticas, representadas en el Pacto.

Precisamente, por ello, hay una oportunidad para el centro democrático, republicano y liberal de ofrecer una alternativa radical al *status quo*, y al proyecto corrupto y autoritario que encarna, pues es evidente

que se consolidará si en las próximas elecciones vuelven a ganar las fuerzas políticas que nos gobernaron este quinquenio. Para que el centro, debilitado por la polarización interna e internacional, sea una alternativa debe hacer un gran esfuerzo para unir a sus múltiples partes dispersas. Esto es muy posible, pero si no lo logra, terminará desapareciendo, ya que los requisitos para inscribir nuevos partidos han vuelto a ser elevados a 700 000 firmas. Ese es un riesgo que no parece correr ni la derecha ni la izquierda.

El centro tiene algunas ventajas. En primer lugar, es una verdadera opción de cambio frente al orden político vigente, masivamente rechazado por la ciudadanía, pues no tiene ni ha tenido vínculo alguno con el Pacto. Esto lo representaría como una opción genuinamente antiincumbente. Muchos de sus líderes tienen exitosas experiencias de gestión pública, pero son figuras relativamente nuevas en la escena electoral nacional. La mayoría de sus precandidatos presidenciales participan por primera vez en una competencia como esta.

Quizá la principal desventaja es su fragmentación. En una elección en la que muy pocos pasarán la valla parlamentaria, es un riesgo muy alto que los distintos núcleos de centro compitan divididos, porque sin escala será difícil que puedan tener protagonismo en una confrontación nuevamente polarizada entre los extremos. Más aún, dada la juventud de sus organizaciones políticas y sus limitaciones en aparato y recursos. Si no hay unidad, siempre habrá la oportunidad para una sorpresa, pero parece muy improbable.

Si el centro político no reacciona para ofrecerle una alternativa viable a los peruanos frente a la continuidad del Pacto, corremos el riesgo de que los males que nos aquejan no solo se extiendan por cinco años más, sino que se perpetúen indefinidamente. Esta es nuestra última oportunidad, no la desperdiciemos.